

Alejandro Mendible Z.

Perú: La táctica del tancazo

Los sucesos recientes caracterizados por el despliegue de tanques en el centro de la capital, Lima, el 21 de abril y posteriormente el 7 de mayo, han despertado la preocupación en relación a quién detenta de manera efectiva el poder en esta república sudamericana de 22 millones de habitantes y 1.285.000 Km² y que vive desde el mes de abril del año pasado en un régimen de democracia restringida como producto del autogolpe propiciado por el presidente Alberto Fujimori. El primer desplazamiento de tanques tenía como propósito amenazar al Congreso y presionar al ejecutivo para que se detuvieran las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Concretamente, se ventilaba la desaparición del catedrático Hugo Muñoz y nueve estudiantes de la universidad de La Cantuta por un comando antisubversivo del ejército, denominado «Equipo Colina». En el segundo despliegue se dirimía la discrepancia entre miembros de la cúpula militar. Se enfrentaron los generales Rodolfo Robles, Inspector General del Ejército, versus Nicolás Hermoza, Comandante General, y Vladimiro Montesinos, Director del Servicio de Inteligencia y estrechamente vinculado al entorno presidencial. Fujimori, tomando partido por los segundos, buscó restarle importancia a los incidentes, y el 8 de mayo declaró a los medios de comunicación que calificaba las denuncias de Robles de, «anecdóticas personales y hasta dañinas para el país». También enfatizó que, «en Perú, el poder político está sobre el poder militar». De esta manera procuró dar la sensación de tener pleno comando de la situación militar.

Sin embargo, el corresponsal del New York Times, Nathaniel C. Nash, poniendo en duda lo señalado por el presidente y considerando los sucesos como un segundo golpe, escribió que «no quedaba ninguna duda de que la suerte del presidente depen-

día en última instancia del respaldo de los generales». Las facciones militares resolvieron votar «democráticamente» contando como ganadora la tendencia que contara con mayoría de tanques; quedaba para el presidente la tarea de convalidar al triunfador de la contienda. En esta oportunidad, surgió favorecida la posición de los «duros» representada por los generales Hermoza y Montesinos, mientras que la cabeza visible de los «blandos», el Gral. Robles, optó por un «estratégico» exilio en la Argentina. Se evidencia que, independientemente de la naturaleza del solio presidencial, existe una determinante dinámica militar expresada mediante una encubierta táctica de tanques la cual, finalmente, decide el fiel del poder en el país.

EL MILITARISMO EN PERU COMO FUNDAMENTO NACIONAL

Las fuerzas armadas han constituido un factor constante en la vida política, ya dirigiendo el gobierno, ya controlándolo entre bastidores. En la actualidad, dotadas de más de 127 mil efectivos (1989), encuentran su justificación histórica en ser garantes de un estado-nacional insertado en una situación geográfica especial en América del Sur, en el centro de la parte occidental del Continente, lo cual le da un carácter importante con gran influencia sobre el Pacífico. Pero, a la vez, aparece rodeado de vecinos poderosos con los cuales ha tenido reiterados enfrentamientos armados por problemas territoriales. Entre ellos, la traumática Guerra del Pacífico contra Chile en el siglo pasado, las guerras en la región de Leticia contra Colombia y los enfrentamientos contra Ecuador. Además, las FF.AA. en un país marcadamente dividido en regiones (costa, selva y montaña), actúan como una institución que mantiene la unidad nacional.

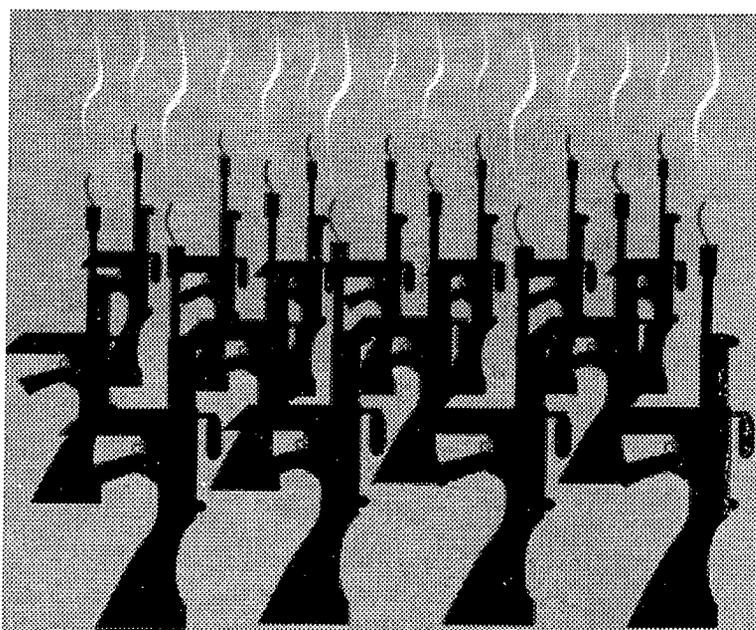
Durante el presente siglo es notorio su poder creciente. En 1919 con Augusto B. Leguía en el conocido «oncenio». En 1930 en el represivo período del general Luis Sánchez Cerro. En 1948 con el general Manuel Odría (dictadura que guardó semejanzas con la de Pérez Jiménez en Venezuela), y entre los antecedentes de la actual situación merece destacarse el período militar del general Juan Velasco Alvarado a partir de 1968. Caracterizado por una posición nacionalista tratando de abrir un espacio original en momentos de la guerra fría que dominaba el panorama mundial.

Velasco pretendía romperle «la espina dorsal» a la tradicionalmente fuerte oligarquía peruana y sustentaba como metas la soberanía nacional, la independencia y prosperidad. Y la creación de una sociedad tan lejos del capitalismo como del comunismo. En 1974, después de la muerte del general Velasco, tomó el gobierno el Gral. Francisco González Bermúdez, quien revisó y modificó las medidas de nacionalización y, constatando el desgaste que la dictadura había producido en las FFAA, buscó una salida que fuera menos lesiva para su prestigio. El 18 de junio de 1978, y luego de doce años de ausencia de procesos electorales para la conformación de los órganos del poder político, el pueblo peruano eligió una Asamblea Constituyente. Este representativo foro nacional elaboró una constitución que contó con amplio consenso en 1979, pero que hoy es cuestionada por el actual gobierno. El encauzamiento del hilo constitucional y el repliegue militar a sus cuarteles fue primero sucedido por la administración conservadora de Belaúnde Terri y, después de 1985, por Alan García, primer presidente aprista en la historia del Perú. García consideró tarea prioritaria de su gestión el tratamiento de la enorme deuda externa que entrababa la economía nacional. Por lo tanto, la consideró el principal problema del país, pero sólo como un problema político.

Sobre la deuda, el discurso de García fue global, y teóricamente concernía a todos los acreedores internacionales y a los domésticos. El presidente no calculó debidamente los efectos de represalia por sus desplantes ante los organismos internacionales, los «todo poderosos» FMI, el Banco Mundial y los gobiernos de la OCDE. El resultado final fue que el crédito se restringió debido al discurso del 10%, y la heterodoxia llegó a su límite en el sector externo en sólo dos años. La estrepitosa caída de la economía



La luz de Sendero Luminoso en ilustración de EL GLOBO



nacional agigantó el costo social del pueblo peruano y colocó al país ante la dura situación de encarar un nuevo ajuste, con lo cual se ponía en peligro el sistema democrático.

En 1989 el nuevo contexto internacional, caracterizado por el inicio del desmoronamiento de la Europa oriental, los serios signos del debilitamiento del bloque comunista (COMECON), la nueva posición de los Estados Unidos en relación a las dictaduras militares después de la guerra de las Malvinas y el arrollador ascenso de las tendencias neoliberales auspiciadas por los gobiernos de Ronald Reagan y la Thatcher, creaban un ambiente propicio para la actualización del ejército peruano. Tampoco en lo interno las condiciones estaban dadas por la grave situación suscitada por la subversión guerrillera. Por lo tanto los comandos militares optaron por esperar la consecución del deterioro del ordenamiento civil antes de dar un golpe tradicional. Mediado por estas circunstancias se producen las elecciones donde se plantea un cambio de timón radical a las economías heterodoxas con orientación populista que se venían aplicando.

Durante los primeros meses de la campaña electoral de 1989 aparece como un fenómeno de las encuestas la candidatura del conocido Mario Vargas Llosa, quien en esta oportunidad, desdoblado a la actividad política, se presenta como «el salvador de la patria», envuelto en un discurso neoliberal radical. Además de Vargas Llosa, propuesto por el Frente Democrático (FREDEMO), surgieron las candidaturas de Luis Alva Castro, por el APRA, y otras dos por las izquierdas: la de Henry Pease, por «Unidad», y la de Alfonso Barrantes, por la

izquierda socialista. Finalmente, tomó auge la candidatura de un desconocido ingeniero agrónomo de ascendencia japonesa, Alberto Fujimori, apoyado por «Cambio 90», quien logró de manera sorpresiva ganar las elecciones con el 56.6% de los votos. El triunfo de las propuestas neoliberales establecía la dramática disyuntiva de establecer la correlación entre la libertad económica y la política. Hecho este que con enorme crueldad y con un alto costo social han experimentado diferentes pueblos latinoamericanos durante la última década. En Perú, para el momento de la toma presidencial, la situación nacional era ostensiblemente calamitosa. El conocido periodista y poeta peruano Antonio Cisneros al comentarla consideraba, «muy grave y muy seria, la más grave y más seria de América Latina», y añadía: «los problemas que tienen colombianos, venezolanos, brasileños, son un juego de niños, comparados con la tragedia del peruano. Perú es un país caótico donde todas las instituciones han llegado a su límite».

Las draconianas recetas «recomendadas» por los organismos internacionales ante el desplome de la sustentación económica nacional le imponían al país eliminar de manera significativa los puestos de trabajo en la administración pública, privatizar los impuestos del Estado, reducir drásticamente las tasas arancelarias para las importaciones, restablecer el libre mercado de tierra (restringido a partir de la Reforma Agraria velasquista), liberalizar el mercado de divisas, dictar normas que disminuyeran los impuestos a pagar por los inversionistas extranjeros y firmar un convenio bilateral

contra el tráfico de drogas que implicaba una importante y peligrosa injerencia de Estados Unidos en la vida nacional.

En particular el último punto se ha convertido en un asunto sensible para los militares, por cuanto consideran perjudicial la nueva posición de la potencia del norte en el sentido de que en los actuales momentos se muestra partidaria de la «desintegración» de las FFAA en el área. Dicha desintegración la creen peligrosa para la nación porque ellos se consideran su fundamento.

LA MARCHA HACIA LA DEMOCRACIA RESTRINGIDA

En la historia del Perú ha privado una fuerte carga hacia el autoritarismo, en gran medida debido a su inalcanzable identidad causante de una sociedad escindida. El problema del indio es una constante y tema frecuente de reflexión desde los primeros tiempos de la colonización. Su legendario pasado gravita con fuerza en el presente y se expresa con brillantez en lo más representativo de su inteligencia, desde Garcilaso de la Vega (el Inca) hasta Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, Ciro Alegría y en los grandes poetas Cesar Vallejo y José María Arguedas. En el presente, no obstante, algunas experiencias, como la experimentada durante el gobierno del general Velasco Alvarado con la aplicación del plan «Tupac Amaru», donde contempló la aceptación del bilingüismo nacional, y los planes muy mal implementados de modernización emprendidos durante el gobierno de Alan García el indígena, continúa viviendo

en otro tiempo histórico.

Las causas del «apartheid» del indio, algunos las detectan en la modalidad asumida por la colonización española en Perú. Para Max Hernández, «mientras Cortés ocupó el corazón del imperio azteca, Francisco Pizarro fundó Lima. Por consiguiente, mientras que México comenzó como una sociedad de mestizos, Perú nació dividido». Otros la detectan en las particulares condiciones geográficas del país, donde la costa y los valles interiores pertenecen al hombre blanco y a los mestizos, mientras que las montañas y los altiplanos son el mundo de los indígenas. O derivada de la marcante separación existente entre la capital Lima y el resto del país. La capital a lo largo de la historia no se ha convertido en el reflejo del país y todavía guarda sentido lo expresado por Alexander von Humbolt cuando se quejaba, a finales del siglo XVIII, de que «en Lima no había aprendido nada del Perú».

La falta de articulación nacional se ha constituido en un factor limitante y en la actualidad argumento para limitar la viabilidad democrática. En este orden de ideas, para el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, «es un país jamás integrado. Que no se formó nunca. Que hoy está moribundo». Vargas Llosa, en su reciente libro «El pez en el agua», donde da cuenta de su experiencia como candidato presidencial, reconoce que, «el Perú no es un país, sino varios, conviviendo en la desconfianza y la ignorancia recíproca, en el resentimiento y el prejuicio, en un torbellino de violencia». Igualmente, otros autores coinciden en señalar que en Perú se superponen por lo menos cuatro países: el oficial, el insurgente, el militar y el narcotráfico. Estos se relacionan entre sí en términos de fricción o colisión.

En buena medida las anteriores consideraciones, las cuales pueden ser interpretadas de orden atávico, se embrincan con la difícil situación en el presente, para conformar un cuadro proclive a considerar la democracia como inviable para la realidad peruana. Por diferentes motivos los diferentes sectores, desde la derecha hasta la izquierda, llegan al convencimiento de ensayar un sistema diferente de gobierno. A lo que se le suma el creciente agotamiento de los partidos políticos y la frustración del ejército de solventar la subversión en un contexto democrático. En el mes de abril del año pasado el presidente Fujimori para justificar el golpe de estado acusa al Congreso de obstrucio-

nista, invoca la necesidad de reformar la «obsoleta» Constitución de 1979, acusa al Poder Judicial de corrupto y designado por las cúpulas e intereses partidistas y la necesidad de erradicar la violencia imperante de los grupos subversivos. En la oportunidad del golpe, Domingo Alberto Rangel, en su habitual columna de un diario caraqueño, comentaba que, «en Perú el Ejército ha tenido que apelar a un líder (...), medio mesiánico y medio titiritero, para remover ciertos obstáculos que la democracia representativa hace inevitable». Otros observadores políticos plantearon que la guerra que se libraba contra la insurrección exigía, para ese momento, de la concentración de los recursos y potestades en pocas manos.

LA SITUACION ACTUAL: LA BUSQUEDA DE UN NUEVO ORDEN

Al cumplirse el primer año del golpe, la primera realización del gobierno de Fujimori es en el plano militar. Con gran despliegue propagandístico se le ha mostrado a la comunidad internacional el enjaulamiento de la persona más buscada del Perú: Abimael Guzmán Reynoso, Camarada Gonzalo. Con su captura los voceros oficiales dicen haberle propinado el más duro golpe a la organización Sendero Luminoso y pronostican su completa derrota para 1995. Igualmente, se ha mostrado la captura de las principales figuras del movimiento armado Tupac Amaru (MRTA): Polay, Carlos Shulte y Lucero Cumpa. Simultáneamente, para combatir las bases de sustentación de las guerrillas, se ha puesto en vigencia una Ley de Arrepentimiento, la implementación de jueces sin rostro, procedimientos sumarios y la modificación de las condiciones carcelarias. Estas medidas parecen estar dando resultados positivos. Según el periódico «Expreso», del 8 de mayo, cientos de personas, la mayoría de ellas adolescentes reclutados a la fuerza por el MRTA y Sendero Luminoso, se han entregado «voluntariamente» al ejército y viven bajo su protección en el convulsionado departamento de San Martín. Y en el departamento de Ayacucho, Pompeyo Javier Rivera Torres, comandante Huayhuco, gestor de las rondas campesinas, afirma que «a fines de año desaparecerá Sendero de la región». Sin embargo, los despachos internacionales siguen informando de la presencia de nuevos ataques terroristas y de la convocatoria a

paros armados.

La capitalización política de los anteriores logros se le ha convertido en una causa de preocupación al gobierno de Fujimori. Por una parte, pone en evidencia que su principal fuente de legitimación es el apoyo militar; no obstante, el mandatario sigue conservando su cuota de popularidad según las encuestas. Pero, por otra parte, los procedimientos empleados por el Ejército en materia de los derechos humanos siguen siendo altamente cuestionados, en especial ante la opinión internacional, lo cual se traduce en una acción limitante para su deseada inserción económica. Y, en lo interno, la sospecha de que la guerra sucia es una política del gobierno y no un hecho aislado le crea un malestar de perturbación que inclusive ha permeado sectores del propio Ejército.

En el plano económico los éxitos todavía no logran convencer de manera plena, e inclusive sectores opositores señalan que el golpe de abril de 1992 impidió el proceso de reinserción económica internacional y lo atrasó durante más de un año. En las últimas semanas las informaciones internacionales dan cuenta de que Perú se convirtió en elegible para nuevos préstamos multilaterales por cuanto llegó a acuerdos con el FMI y con el Banco Mundial. También las informaciones señalan entendimientos satisfactorios con el Club de Roma. Pero en relación a la inflación el presidente tuvo que reconocer durante la primera semana de mayo que todavía no son satisfactorios los índices que se vienen registrando, «porque desbordan el programa económico».

En lo político se encuentra en curso una reforma constitucional, la cual se espera esté completa para el 28 de julio próximo, buscando coincidir con la fecha patria. Mediante la misma se pretende ampliar la pena de muerte para los terroristas, consagrar las amplias potestades para el Presidente de la República, permitirle la reelección presidencial, reformar el poder Judicial y evitar el retorno a un parlamentarismo que dé cabida a fuerzas políticas disonantes con el compás autoritario del régimen.

Recientemente Fujimori declaró a la revista norteamericana «Newsweek» que «la democracia formal no resuelve todos los problemas del Perú». Pero está por verse si los mismos pueden ser resueltos mediante la táctica de los tancazos. O el presidente demuestra ser lo suficientemente hábil como para establecer un nuevo orden que le otorgue la paz y la prosperidad al Perú.